

Comentarios

La privatización que no es privatización de los servicios públicos de salud

Una característica fundamental de los regímenes capitalistas es el encubrimiento de la realidad esencial, de allí que siempre es preciso estar atentos para desmitificar la realidad aparental en que se actúa. Así, por ejemplo, el gobierno y sus epígonos nos han dicho que en ningún momento se privatizarán los servicios públicos de salud, porque no venderán a empresarios capitalistas los equipos ni las instalaciones del sistema de salud pública, en particular del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Lo que se hará, y se está haciendo ya, es contratar empresas privadas capitalistas para que presten servicios de salud, que no alcanza a proporcionar el sistema público, sobre todo el seguro social. Pero los usuarios no tendrán que pagar nada, sino que será el gobierno o el seguro social el que correrá con los costos de tales servicios.

Parece lógico, parece que no se afectará a los usuarios, parece que no hay privatización. Esta es la apariencia. ¿Cuál es la realidad esencial? Obviamente es una privatización parcial de los servicios públicos de salud. En un primer momento se puede considerar como algo marginal, como poco significativo. Pero en la medida que no se realicen inversiones públicas en el área de salud, la demanda creciente de servicios irá siendo satisfecha por empresas capitalistas, hasta que se invierta la relación y los servicios públicos de salud pasen a ser algo marginal.

¿Cuál es la racionalidad de la estrategia? Obviamente, lo que se busca es que los empresarios capitalistas del área de la salud se lucren con la prestación de tales servicios, lo cual es una privatización.

Un gobierno que no respondiera a los intereses del capital, lo que haría es aumentar las inversiones en el área de salud y contratar más personal, a fin de cubrir las necesidades crecientes de los servicios de salud. Pero los gobiernos de ARENA, claramente son gobiernos de la burguesía y buscan responder a sus intereses, y en tal sentido, lo que buscan es ampliar los espacios de valorización del capital, esto es, privatizarlo todo, hasta que no exista nada de lo que no se lucren empresarios capitalistas.

Sabido es que los empresarios capitalistas lo que buscan es el beneficio, su única racionalidad es la ganancia y para conseguirla son capaces de hacer lo que sea. En razón de ello, cabe esperar el aumento de los internamientos innecesarios, que se realicen operaciones quirúrgicas innecesarias, que se receten tratamientos innecesarios, que se efectúen análisis innecesarios, etc. Como ocurre en la actualidad, cuando las empresas capitalistas de servicios de salud se enteran de que el usuario cuenta con un seguro de salud.

En un primer momento, los usuarios estarán muy felices de visitar los centros hospitalarios privados, maravillados de la comodidad y de los servicios extras que le ofertan al paciente. Si hasta parecen hoteles de cuatro estrellas, seguramente por esa razón es que los ricos se hospedan allí, cuando tienen una orden de detención judicial.

Un primer problema que trae consigo la privatización de los servicios públicos es que aumentará el gasto público en salud, o en su caso los gas-



tos del seguro social y esto por dos razones. Primero, la empresa privada, al exigir una determinada tasa de ganancia sobre su inversión, es obvio que aumenta el precio del servicio de salud. Lo cual no ocurre con el servicio público, ya que allí solo cuenta el costo del servicio. Suponiendo que se tiene un costo similar, en el ámbito público y privado, el precio del privado es mayor, porque se le añade la ganancia. Pero cabe suponer que los costos del servicio privado son mayores, porque remunera mejor a los trabajadores de la salud y si a eso, le agregamos los "extras" que ofrecen los servicios privados capitalistas, es obvio que el precio aumenta. La segunda razón tiene que ver con los tratamientos, los internamientos, los exámenes, las operaciones innecesarias, que la avidez de las ganancias les impulsará a realizar. Y claro, como el usuario no es el que paga, no hay nada que discutir con él ni mucho menos esperar algún tipo de resistencia de su parte. El Estado es el que paga.

Las consecuencias de lo anterior serán aumentar el gasto público en salud, o los gastos del seguro social y como ninguno de los dos posee ingresos ilimitados, vendrán los problemas y las posibles medidas o acciones de los que participan en

la operación. El Estado podría optar por sacrificar otros gastos sociales, a fin de mantener los gastos en salud, donde los empresarios harán su negocio. Lo cual afectaría a la población pobre, que dejaría de percibir otros servicios públicos. O bien, los servicios se deterioran por la incapacidad del gobierno de pagar. Lo cual también sería nocivo para la población más pobre. O se crearán nuevos impuestos, FOSALUD, donde se busca penalizar a las víctimas y no a los victimarios. A quienes se debería aumentar los impuestos es a las empresas que se lucran con la producción, la comercialización y la publicidad de productos adictivos, y no a los consumidores. Pero claro, los gobiernos de la burguesía cuidan sus intereses. Por su parte, el seguro social, al no poder pagar, disminuirá la cobertura, desmejorará los servicios o buscará aumentar las cotizaciones de los asegurados. Todo ello es evitable, si no se actuara buscando beneficiar a los empresarios capitalistas.

Sabido es que resulta mejor construir una vivienda con recursos propios, aunque sea de manera lenta y progresiva, que pagar un alquiler por la misma durante toda la vida. O inclusive, que es preferible obtenerla mediante el uso de un crédito, aunque resulte más cara, que pagar un alquiler por la misma y nunca llegar a ser propietario.

Si el gobierno o el seguro social no logran satisfacer la demanda de servicios públicos, lo lógico es invertir a fin de aumentar la oferta y mantener el servicio público, ya que, desde una perspectiva social, ello resulta más económico. Pero claro, esta lógica no la acepta el gobierno de la burguesía y para la burguesía, porque de lo que se trata es de beneficiar a los empresarios capitalistas, a costa de la población trabajadora. Lo mismo se puede argumentar ante los procesos de privatización de la educación o de cualquier otro servicio público no mercantil o gratuito. En educación se anda en busca de alquilar locales que funcionen como aulas, para ampliar la cobertura de la educación pública, cuando como ya lo señalábamos, resulta mejor invertir en la construcción, que pagar un alquiler siempre.

Se sostiene que un indicador de justicia o injusticia social, en un determinado país, es la mayor o menor existencia de una oferta de bienes y servicios no mercantiles. Pero para gobiernos como el nuestro, la justicia social no es algo que interese, por ello es que persisten con los procesos privatizadores. Es más, hasta les desagrada y con seguridad, por tal razón, les desagrada el régimen

cubano, donde existe la mayor oferta de bienes y servicios no mercantiles, de al menos, en América. Por ello es que no tenemos relaciones diplomáticas con esta nación, pero sí relaciones comerciales. Curioso. Cuando de hacer negocios se trata, poco importa de quién se trata. Aunque para el canciller de la república, ello indica la libertad que existe en nuestro país. Lo cual proviniendo de un

funcionario público es revelador de cómo entienden la libertad: libre mercado, libre empresa, libre comercio. Y por ello, con seguridad, es que identifican democracia con capitalismo.

AQUILES MONTOYA
Catedrático del Departamento
de Economía de la UCA

